

MÉXICO EN EL DESFILADERO: LOS AÑOS DE SALINAS

Marcelo Cavarozzi
(coordinador)



Juan Pablos Editor
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
México, 1997

Introducción	
<i>SERGIO BERENSZTEIN, MARCELO CAVAROZZI</i>	9
Gobernabilidad y democracia en una transición incierta	
<i>ANTONIO CAMOU</i>	37
El rompecabezas salinista: recuento político de un gobierno	
<i>ALBERTO AZIZ NASSIF</i>	59
¿De la gobernabilidad autoritaria a la gobernabilidad democrática?	
<i>JOSÉ WOLDENBERG</i>	89
Estado y Fuerzas Armadas en México	
<i>MÓNICA SERRANO</i>	117
La transición al mercado en México: desempeño económico e instituciones políticas	
<i>BLANCA HEREDIA</i>	151
Post-Scriptum	
<i>MARCELO CAVAROZZI Y SERGIO BERENSZTEIN</i>	175

INTRODUCCIÓN

Sergio Berensztein
Marcelo Cavarozzi

En 1988 comenzaba el sexenio cuya figura excluyente iba a ser, al menos hasta fines de 1993, Carlos Salinas de Gortari. A esa altura México se enfrentaba, tal vez por primera vez en su historia posrevolucionaria, a un conjunto muy complejo de desafíos. Éstos iban a traer aparejados profundos cambios en lo que hasta ese entonces había constituido una fórmula política sorprendentemente perdurable y eficiente. Las raíces más profundas de tales desafíos alcanzaban en efecto a la médula misma de la lógica política que caracterizó al México contemporáneo. Se generaba de tal modo una combinación también confusa de incertidumbres que abarcaban los planos económico, político y social. Más aún, los principales actores políticos y sociales estaban ciertamente acostumbrados a que la imbricación entre el PRI y la estructura estatal mexicana proveyera un marco de regulación (es decir, un conjunto de normas y principios ampliamente conocidos aunque nunca claramente explicitados) que había resultado sin duda exitoso para crear y reproducir el orden político posrevolucionario. En la nueva coyuntura, esos actores descubrieron que el sistema político mexicano estaba envuelto en una crisis cuya resolución implicaría sin duda un cambio más o menos drástico de la hasta entonces exitosa fórmula política.

Había, entonces, una clara percepción de que se avecinaban momentos de cambio, aunque debido a las características de la coyuntura, era muy difícil divisar el rumbo que finalmente tomaría la inminente reforma de la política. En efecto, los escenarios imaginables en 1988 eran muchos dado que eran también múltiples las variables que debían incorporarse a cualquier modelo que buscara siquiera delinear las características de la emergente fórmula política mexicana. Tres eran, sin embargo, las principales alternativas que surgían en las especulaciones sobre el futuro político mexicano a comienzos

del sexenio de Salinas de Gortari.¹ En primer lugar, una acentuación de los rasgos autoritarios del sistema; en segundo lugar, una extensión (cualitativa y cuantitativa) de experiencias de insurrección popular; y, finalmente, una liberalización del régimen político que tendiera a la constitución efectiva de una democracia de partidos políticos. Estas alternativas no eran, por cierto, totalmente excluyentes, pero a los efectos del análisis, pueden ser diferenciadas para examinar brevemente las características centrales de cada una de ellas. Asimismo, es conveniente adelantarse en el análisis para señalar que la realidad emergente no fue, en rigor, similar a ninguna de esas alternativas. En realidad, hasta ahora ha resultado un híbrido que, aunque reconoce elementos de las tres, no responde centralmente a ninguna de las lógicas implicadas por las metáforas asociadas a ellas, es decir: la profundización autoritaria, la revolución social y la democracia.

LA "REFEUDALIZACIÓN" DE LA VIDA POLÍTICA MEXICANA

Pensar en la acentuación de los rasgos autoritarios que ya estaban por cierto sólidamente instalados en la vida política mexicana (pre y pos-revolucionaria) constituía uno de los escenarios verosímiles perfilados en 1988. Esto era así no sólo debido al peso de la tradición, de la historia, es decir, no sólo debido a la eventual continuidad de muchas de las características más notorias del sistema político mexicano: también, el reforzamiento del autoritarismo podía ser resultado de una estrategia ofensiva por parte de un sector significativo de la clase política priísta.

En efecto, eran ya evidentes hacia finales de la administración de De la Madrid la magnitud y complejidad que probablemente asumirían los procesos vinculados a la implementación del programa de reformas económicas. Quienes defendían a rajatabla las políticas de estabilización y apertura comercial intuían que la tarea transformadora era tal que para llevarla a cabo resultaba imprescindible reconcentrar el poder primero, para eventualmente fragmentarlo —poco a poco— después. En particular, era impensable el éxito de esas medidas si no

¹ Véase, sobre todo, Wayne Cornelius, Judith Gentleman y Peter Smith, "Overview: the dynamics of political change in Mexico", en W. Cornelius, J. Gentleman, y P. Smith (eds.), *Mexico's Alternative Political Futures*, San Diego, California, Center for United States-Mexican Studies, UCSD, 1989.

se fortalecía la figura presidencial que había resultado tan vapuleada durante el sexenio que finalizaba. Sin duda, el ambicioso paquete de reformas económicas necesitaba también de cierta consistencia y homogeneidad en el manejo público para lograr, siquiera, las metas mínimas (ordenamiento financiero doméstico, control de la inflación y estabilidad macroeconómica). El nuevo presidente, consecuentemente, debía ser capaz de controlar de algún modo los obstáculos que sectores internos del PRI, visceralmente opuestos a las reformas, habrían de poner. Más aún, si se quería avanzar profundamente en la senda del cambio estructural, era entonces evidente que debían acumularse todavía mayores recursos económicos y políticos ya que tales políticas habrían de generar un marcado cambio en la distribución del ingreso y la riqueza, lo cual obviamente generaría presiones sectoriales de importancia.

En consecuencia, el desafío que significaba la reforma económica podía crear la percepción acerca de la necesidad de reconcentrar el poder fortaleciendo los mecanismos autoritarios de control. Pero había también razones aún más específicamente políticas para hacerlo. En particular, la maquinaria partidaria del PRI se había constituido en torno (y, ciertamente, gracias) a esos mecanismos autoritarios en los niveles local, regional y nacional. Se trataba obviamente de una maquinaria muy sofisticada, pero que hacia 1988 ya había dado señales evidentes de un profundo desgaste. Más aún, los conflictos internos del PRI constituían hacia 1988 una de las más importantes fuentes de conflicto e inestabilidad del sistema político mexicano. La crisis interna protagonizada por Cuauthémoc Cárdenas que dio lugar a la fractura de la corriente democrática del PRI y la posterior constitución del Partido de la Revolución Democrática no era sino un indicador del grado de descomposición interna que vivía el partido en el poder al final de la administración de De la Madrid. Ante ese cuadro, el reforzamiento del autoritarismo (aun cuando formalmente se trataran de cuidar algunos aspectos particularmente irritantes para la opinión pública nacional y sobre todo internacional) podía significar una estrategia adecuada para evitar una faccionalización aún mayor del PRI y, consecuentemente, el incremento de una incertidumbre que era, vale la pena reiterar, tal vez inédita en la historia mexicana reciente.

En síntesis, la acentuación de los rasgos autoritarios del sistema político mexicano podría haber llegado a resultar de la combinación de un conjunto de elementos: *a)* la continuidad de la tradición autoritaria tan arraigada en la historia mexicana; *b)* la percepción de que

las reformas económicas que ya se habían comenzado a implementar durante la presidencia de Miguel de la Madrid requerían una concentración del poder y, sobre todo, una represidencialización del sistema político; y c) el hecho de que los conflictos internos del PRI urgían asimismo la centralización de la autoridad para evitar una fragmentación aún mayor de una agrupación que acababa de sufrir la desertión del hijo de uno de sus líderes más admirados.

Nótese, finalmente, que estos tres elementos implican una negación de la democracia política, ya sea por ser ajena a la tradición política local, por ser ineficaz para implementar políticas públicas, o bien por significar un riesgo de acentuación del conflicto interno dentro de la élite gobernante. Más adelante se analizarán nuevamente las consecuencias de esta triple percepción para las perspectivas de liberalización del sistema político mexicano, así como otras tendencias y factores que, contradictoriamente, parecerían indicar que existen, por fin, al menos algunos indicios de que México está democratizándose de hecho. Pero antes, sin embargo, conviene detenerse a analizar una segunda alternativa que hacia 1988 aparecía en el horizonte político mexicano. En el largo plazo esta alternativa no excluía totalmente la posibilidad de inducir una democratización tal vez forzada. Sin embargo, en el corto plazo podría más bien producir un reforzamiento de los mecanismos autoritarios de la política mexicana. Se trataba de la ruta insurreccional.

LA RUTA INSURRECCIONAL

En verdad, las consecuencias del resquebrajamiento del aparato del PRI y de la clase política no sólo podía traer aparejado un reforzamiento del autoritarismo. También era posible prever un recrudescimiento de experiencias de protesta e insurrección popular que resultaran más o menos exitosas o efectivas. Indudablemente, existían nuevas y viejas razones para promover tales manifestaciones de corte radical. Sin embargo, uno de los datos de la nueva realidad era que, hasta entonces, una de las virtudes más importantes del PRI había sido su notable capacidad para controlar esos conflictos sociales. Eso lo había logrado mediante distintos mecanismos, uno de los cuales consistía en la cooptación de líderes de los movimientos vinculados a protestas y demandas.